

Cuotas de género y paridad en la legislación electoral de América Latina: Mujeres, partidos políticos y Estado

Mariana Caminotti*

I. Introducción

En América Latina, durante las últimas dos décadas una multiplicidad de reformas de la legislación electoral condujo a la adopción de leyes de cuota y paridad que apuntan al logro de la igualdad real de las mujeres en los procesos de selección de candidatos, promoviendo su inclusión en las instituciones representativas. El primer país en adoptar cuotas legales fue la Argentina en 1991 y el último ha sido Chile, en 2015¹. A su vez, en algunos países (Argentina, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, México) los criterios de acción afirmativa y paridad se plasmaron en artículos constitucionales que aseguraron las reformas, haciendo difícil su derogación. Todo indica que las medidas de equidad y de igualdad de géneros llegaron para quedarse en la región.

En palabras de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, los cambios institucionales y jurídicos a favor de la igualdad de género constituyen “el logro principal y más generalizado que ha tenido lugar en la región” (Bárcena, en CEPAL 2014: 5). Con distintos ritmos y tensiones, “la recuperación de la democracia, los procesos de paz, las Asambleas Constituyentes, las reformas al modelo económico fueron oportunidades para el avance de los derechos de las mujeres” (CEPAL 2014: 16), incluidos sus derechos políticos.

Este capítulo analiza la trayectoria de los procesos de adopción de las leyes de cuota y paridad política con la mirada atenta a su implicancia para tres protagonistas principales: mujeres, partidos e instituciones estatales. Esta perspectiva es fundamental para comprender el carácter dinámico e inacabado de las reformas y la evolución de la legislación electoral en la materia. El análisis se basa en un estudio de casos integrado (Yin 1994) que utiliza *process tracing* para caracterizar estos procesos y construir un mapa regional. La información proviene de una base de datos de elaboración propia que contiene observaciones para cada año entre 1990 y 2015 (enero) y cubre 19 países. En el período señalado se contabilizaron treinta y cuatro (34) leyes nacionales de cuota y paridad, y cinco (5) que se consideran proto cuotas (*soft quotas* en la conceptualización de Krook *et al.* 2009), en la medida en que son normas que tienen carácter programático pero no llegan a establecer obligaciones vinculantes para los partidos políticos.

¹ En Chile, el 14 de enero de 2015 el Senado aprobó un proyecto que incorpora una cuota de género como parte de una reforma electoral más amplia que pone fin al sistema electoral binominal. De acuerdo con la nueva legislación, las listas que competirán en las elecciones legislativas del 2017 no podrán tener más de un 60% de personas del mismo sexo en su composición.

El argumento principal es que, en América Latina, las leyes de cuota y paridad fortalecieron el marco de protección de los derechos políticos de las mujeres como parte de los derechos fundamentales garantizados por el Estado democrático, pero los avances en la institucionalidad *formal* (leyes y artículos constitucionales) conviven con condiciones estructurales y reglas *informales* que dificultan la igualdad sustantiva. Como resultado de la fricción entre las reglas formales y las estrategias partidarias para acomodarse a ellas (que van del cumplimiento minimalista al desacato, el acoso y la violencia política de género) se constatan esfuerzos repetidos para readecuar la legislación de cuotas (procesos de “reforma iterada” en términos de Krook 2005a). En consecuencia, las reformas electorales pro-igualdad tienen un carácter inestable y se ven sujetas a ajustes y redefinición.

II. La desigualdad de las mujeres en política y la reforma electoral como respuesta regional

En América Latina, la participación de las mujeres en la política de partidos y su llegada a los puestos de elección popular ha contribuido a la transformación de los Congresos, sus prácticas y sus agendas (Archenti 2011, PNUD/Rodríguez Gustá 2011). El promedio de legisladoras nacionales se triplicó entre 1990 y 2014, pasando de 9% a 25%, y seis países se ubican en los primeros veinte puestos del ranking internacional de Mujeres en el Parlamento².

En el mismo período, dieciséis países transitaron procesos de reforma política que llevaron a la incorporación de cuotas mínimas para mujeres y mecanismos de paridad de género en la legislación electoral (o regulatoria de partidos políticos)³. Siguiendo a Krook (2013), este trabajo adopta una definición amplia de las cuotas de género, entendidas como medidas que “(a) buscan aumentar el número de mujeres candidatas a los cargos políticos y (b) están articuladas explícitamente de alguna manera”. Según esta definición, las leyes de paridad califican como cuotas de género.

Las leyes de cuota son un fenómeno característico de América Latina (Araújo y García 2006). La opción por la reforma legal distingue a la región de la respuesta más frecuente en Europa, que radica en la incorporación de cuotas voluntarias en los estatutos internos de las organizaciones partidistas (Krook 2005, Caul 2001, Matland y Studlar 1996)⁴. A diferencia de estas cuotas de naturaleza voluntaria (que solamente emplean los partidos que deciden hacerlo), las *cuotas*

² Se trata de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Ecuador, México y Argentina. Ver: <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm> (situación al 1 de diciembre de 2014). Para un detalle de los porcentajes de legisladoras nacionales pueden verse los gráficos 3 y 4 en el Anexo.

³ Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (donde las cuotas se dejaron sin efecto).

⁴ Tras su difusión transnacional en América Latina, las cuotas legales viajaron a países de África, Medio Oriente y el Sureste de Europa (Krook 2008) y también existen en casos como Francia, España, Portugal, Irlanda y Bélgica (Meier 2008; Sineau 2008). Sin embargo, en Europa Occidental predominan las cuotas partidarias. En el Caribe, el único país que tiene ley de cuotas es Guyana.

legales representan una solución coercitiva que exige postular mujeres candidatas⁵. Por último, a diferencia de las cuotas electorales que establecen mecanismos concretos (“explícitamente articulados”) para aumentar el número de candidatas, las proto-cuotas adoptan la forma de sugerencias y recomendaciones, y pueden plasmarse tanto en leyes nacionales como en la normativa partidaria interna (declaraciones, estatutos, entre otros).

En América Latina, las leyes de cuota exigen la postulación de un porcentaje de mujeres en las candidaturas de elección popular que oscila entre 20% (Paraguay) y 50% (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y México)⁶. Además, varias normas contienen mandatos de posición (MP) o mecanismos de alternancia por sexo para impedir que los partidos ubiquen a las candidatas en lugares sin posibilidades *reales* de salir elegidas. Si los partidos no cumplen la cuota, generalmente se les aplica una sanción: la más frecuente es la negativa a registrar candidaturas aunque en El Salvador y Honduras hay multas económicas⁷. Sin embargo, no siempre quedan claras las atribuciones de los organismos electorales que tienen que hacerlas efectivas (CEPAL 2014).

Tabla N° 1
Cuotas legales en vigencia en América Latina, 2015 (enero)

País	Año aprobación cuota vigente	% cuota	Posición	Sanción	Rige para candidaturas a...
Argentina	1991	30%	Si	Si	Cámara de Diputados y Senado
Paraguay	1996	20%	No	Si	Cuerpos colegiados
R. Dominicana	2000	33%	Si	Si	Cámara de Diputados y cargos municipales, exceptuando el de síndico
Perú	2000 y 2003	30%	No	Si	Cargos de representación popular e internas de partidos
México	2014	50%	Si	Si	Congreso de la Unión, congresos locales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Brasil	2009	30%	No	No	Cámara de Diputados, legislaturas estatales y municipales
Costa Rica	2009	Paridad	Si	Si	Cargos de elección popular

⁵ Una tercera solución son los escaños reservados, que apartan un porcentaje de bancas legislativas para mujeres, en lugar de candidaturas.

⁶ En Panamá, el Código Electoral exige que los partidos políticos garanticen la paridad de género en las candidaturas que se presentan a elecciones internas (no a la general).

⁷ En Panamá, los partidos deben rendir cuentas ante la Comisión Electoral sobre la aplicación del balance de género en sus elecciones internas y la violación del mandato legal se pena con una multa equivalente al 5% de la financiación que proporciona el Estado. No obstante, el Código Electoral vigente exceptúa del cumplimiento de la paridad a las organizaciones que no tengan una proporción semejante de mujeres en sus filas, “de manera comprobada por la secretaría femenina del partido” (Art. 239), una cláusula que flexibiliza la exigencia de la legislación. En Chile, la ley de cuotas contempla una sanción (el rechazo de las candidaturas del partido) y un incentivo (un mayor aporte fiscal a los partidos de acuerdo con las mujeres que resulten electas).

Ecuador	2009	Paridad	Si	Si	Asamblea Nacional, Parlamentos Andino y Latinoamericano, Consejos regionales, distritales y municipales, Juntas parroquiales
Uruguay*	2009	30%	Si	Si	Parlamento nacional, Juntas Departamentales y locales
Bolivia	2010	Paridad	Si	Si	Cargos de representación y elecciones internas de organizaciones políticas
Colombia	2011	30%	No	Si	Corporaciones de elección popular
Honduras	2012	40% a paridad en 2016	Si	Si (multa)	Cargos de elección popular y de dirección de los partidos
Nicaragua	2012	Paridad	Si	No	Asamblea Nacional, Parlamento Centroamericano y municipios
Panamá	2012	Paridad (internas)	No	No	Elecciones internas de partidos políticos
El Salvador	2013	30%	No	Si (multa)	Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano, municipios

*Esta ley se aprobó para las elecciones nacionales de 2014 y departamentales de 2015, respectivamente.

Fuente: elaboración propia basada en *Quota Project*, Observatorio de la Igualdad de Género de la CEPAL y legislación nacional.

Desde un ángulo normativo, las cuotas se fundamentan en una distinción entre igualdad formal e igualdad sustantiva (Bacchi 2006). Para sus defensores, la igualdad política formal plasmada en leyes y constituciones enmascara las desigualdades *reales* de poder que marginalizan a las mujeres como grupo en la definición de las candidaturas y el acceso a los cargos políticos. Desde un punto de vista operativo, las cuotas son reglas que buscan atenuar los privilegios masculinos en la selección de candidatos, acotando el grado de libertad de los partidos y de sus dirigencias⁸. Al exigir que los partidos seleccionen mujeres, las cuotas no ponen el acento en las propias mujeres sino en los actores que controlan el reclutamiento político (Dahlerup y Freidenvall 2003) y son, “en significativos modos, los *gatekeepers* de igualdad de género” (Connell 2005: 1801-2).

Al ser instrumentadas, las cuotas electorales interactúan de distinta manera con las instituciones existentes. La aplicación de cuotas en la selección de candidatos puede generar imperativos más o menos compatibles con el sistema electoral, las tradiciones y las reglas de decisión de los partidos políticos, e incluso con los principios constitucionales del país. El objetivo de garantizar la *selección* de mujeres ha generado controversias divisorias en países con tradiciones liberales donde las élites consideran que las acciones positivas ignoran la competencia y los criterios de

⁸ Las cuotas legales pueden generar cambios en los criterios partidarios y en las decisiones referidas a quiénes competirán por qué cargos y en qué distritos. En cambio, no modifican la estructura general de incentivos del sistema electoral ni afecta la competencia entre partidos (Htun 2004).

mérito que asegurarían la elección de personas idóneas (Bacchi 2006: 33)⁹. En cambio, el uso de cuotas cobra mayor legitimidad cuando se sustenta en tradiciones políticas sensibles a criterios de racionalidad sustantiva (López Novo 1994) y en el reconocimiento constitucional de las acciones positivas o de la paridad¹⁰.

III. De Beijing a Quito y después: dos décadas de transformaciones normativas

Inicialmente, el diagnóstico que inspiró las reformas estuvo influenciado por el entorno de ideas provistas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por su sigla en inglés) y la Plataforma de Acción Beijing. La CEDAW diferenció la discriminación *directa* e *indirecta* e instó a los gobiernos a adoptar medidas especiales de *carácter temporal* para acelerar la igualdad real de las mujeres en la vida pública y política (Artículo 7)¹¹. Esta Convención entró en vigencia en 1981 y hacia 1990 había sido ratificada por todos los Estados latinoamericanos. Un conjunto de documentos resultantes de encuentros regionales de mujeres hacen referencia a la CEDAW como uno de los acuerdos internacionales fundamentales para legitimar las cuotas electorales (Crocker 2005).

Pocos años después, la Plataforma de Acción resultante de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995) propició un cambio discursivo (Dahlerup 2006) al poner el foco en las desigualdades de poder entre los géneros y en las actitudes y mecanismos de discriminación presentes en la sociedad y en los partidos políticos. Entre otros puntos, la Plataforma reconoció que “...las modalidades tradicionales de muchos partidos políticos y estructuras gubernamentales siguen siendo un obstáculo para la participación de la mujer en la vida pública. Las actitudes y prácticas discriminatorias, las responsabilidades con respecto a la familia y la crianza de los hijos y el elevado costo que supone aspirar a cargos públicos y mantenerse en ellos son factores que pueden disuadir a las mujeres de ocupar puestos políticos” (Art. 182).

A partir de esta comprensión, se definió el objetivo estratégico de adoptar medidas que garanticen la igualdad de acceso y la plena participación de las mujeres en las estructuras de poder y en la

⁹ Desde estas posiciones, la premisa central es que el reclutamiento político debe estar guiado por criterios de mérito y que la empresa de las sociedades pluralistas es garantizar el mismo tratamiento a distintas personas, la clásica posición liberal sobre igualdad formal que no contempla las desigualdades fundadas en la construcción social de la diferencia sexual (entre otras). Por una interesante discusión desde la ciencia política, se puede ver Sartori (1992).

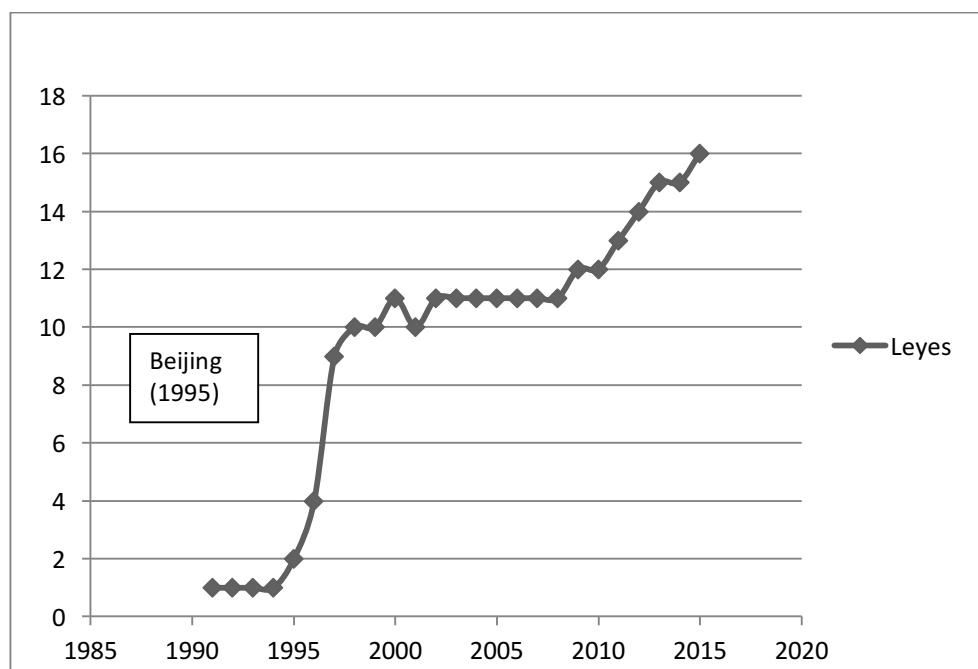
¹⁰ En la Argentina, por ejemplo, la incorporación de acciones positivas en la Constitución de 1994 fortaleció la ley de cupo femenino (1991), contrarrestando argumentos sobre su inconstitucionalidad. En Colombia y la República Bolivariana de Venezuela se sancionaron leyes que luego se declararon inconstitucionales.

¹¹ La CEDAW define la discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga *por objeto o por resultado* menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad con el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (énfasis añadido). El Artículo 7 insta a los Estados a “tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizar a las mujeres el derecho de “votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objetos de elecciones públicas”.

adopción de decisiones (Objetivo estratégico G.1), incluyendo reformas electorales “que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que los hombres” (Art. 190, b y d).

En la tercera ola de democratización de América Latina, este desarrollo normativo tuvo dos consecuencias: en primer lugar, ubicó a los partidos políticos como problema y al Estado como garante de los derechos fundamentales, incluidos los derechos políticos de las mujeres (Torres García 2013); en segundo lugar, estas normas y documentos internacionales justificaron el uso de *medidas temporales* para alcanzar la igualdad sustantiva en el acceso a puestos de poder y decisión. Como un indicador de la influencia de la Plataforma de Beijing en la región, la adopción de cuotas cobró un notable impulso en los dos años que siguieron a la Conferencia. En 1995, sólo dos países habían aprobado una ley de cuotas; en 1998, esta cifra se elevaba a diez (Gráfico 1). A su vez, algunas redes e instancias regionales proporcionaron canales de intercambio y favorecieron la diseminación de modelos para la acción política. A título de ejemplo, la primera Ley de Cuotas de Brasil (1995) fue fruto de una iniciativa de la diputada federal Marta Suplicy (PT) luego de una reunión del Parlatino en San Pablo, preparatoria de Beijing, donde se discutió la ley de cupos pionera de Argentina (Htun y Jones 2002).

Gráfico N° 1
América Latina: leyes de cuota en vigencia, por año (1991-2015)



Fuente: elaboración propia basada en legislación electoral nacional.

Otro hito que marcó un punto de inflexión en las reformas de la legislación electoral fue la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y su declaración, el Consenso de Quito (2007). En este encuentro, las Ministras y representantes de los Mecanismos para el Adelanto de

las Mujeres de 34 países se posicionaron acerca de dos temas que se consideraron “de importancia estratégica”: i) la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, y ii) la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado. El Consenso de Quito definió a la paridad como un pilar de la democracia, “cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares [...] sociales, económicas, políticas y culturales” y que constituye “una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres” (Consenso de Quito, punto 17)¹².

En el 2010, la XI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe aprobó el Consenso de Brasilia, el cual ratificó este llamado hacia la paridad abogando, una vez más, por la adopción de políticas afirmativas y la importancia de garantizar no solo una composición paritaria de las listas electorales sino también la paridad de resultados en los cargos y el acceso de las mujeres a los espacios de decisión de los partidos políticos, al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral (Llanos Cabanillas 2013).

Ambos consensos regionales permitieron articular una nueva manera de enmarcar la exigencia de igualdad política como un reclamo de profundización democrática, y fueron puntos de referencia para las mujeres políticas, las organizaciones de mujeres y activistas. En los dos años que siguieron a la Conferencia de Quito, el principio de paridad se plasmó en dos Constituciones (Ecuador, 2008; Estado Plurinacional de Bolivia, 2009) y en la reforma del Código Electoral de Costa Rica (2009). A estos países se sumaron Honduras, Nicaragua y Panamá en 2012, que modificaron su legislación electoral, y México, que incorporó la paridad en una enmienda constitucional y en su legislación (Peña Molina 2014)¹³. Si bien la paridad no se diferencia enteramente de las cuotas mínimas al momento de su aplicación –por razones que se discuten más adelante– la región comienza a transitar el pasaje desde un modelo centrado en las medidas especiales para mujeres (según la definición de la CEDAW), a uno que expresa un compromiso

¹² Desde esta comprensión, el documento incorporó diferentes acuerdos tendientes a: i) adoptar medidas para garantizar la plena participación de las mujeres en los cargos públicos y políticos; ii) impulsar “políticas electorales de carácter permanente” que lleven a los partidos políticos a incorporar las agendas de las mujeres y el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos; iii) propiciar la puesta en práctica de acciones positivas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales internas de los partidos políticos para lograr la inclusión paritaria de las mujeres; iv) así como *adoptar* medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, en los partidos y movimientos políticos; entre otros puntos de relevancia.

¹³ Cabe destacar que en Panamá, el Art. 239 del Código electoral estableció la garantía de la paridad de género en las candidaturas que se presenten en las elecciones internas de los partidos políticos y hasta las primarias. A su vez, los partidos deben establecer los procedimientos para hacer efectiva dicha disposición en su régimen interno, evitando la definición de un mandato de posición homogéneo para todas las agrupaciones políticas. A su vez, la norma habilita la posibilidad de que los partidos donde la participación femenina sea inferior al 50%, a completar las candidaturas con aspirantes de sexo masculino.

permanente del Estado democrático con la igualdad sustantiva en distintos niveles y esferas (el propio Estado, los partidos, el mercado, las familias).

IV. La dinámica de las reformas: protagonistas y nudos de conflicto

Desde los inicios de la década de 1990 y hasta el presente, la exigencia de cuotas fue impulsada fundamentalmente por mujeres políticas (Franceschet y Krook 2006) tendiendo como destinatarios principales a los partidos y sus dirigencias masculinas. A su vez, las mujeres de partidos encontraron aliadas (y aliados) en las instituciones estatales, en organismos internacionales y en el movimiento de mujeres, con variaciones por país y período.

La ley de cuotas pionera de Argentina resultó de la lucha de mujeres de los principales partidos políticos, en el marco del proceso de redemocratización que transitaba el país tras un violento régimen autoritario. La iniciativa se originó en un intento fallido de incorporar cuotas al interior del partido gobernante entre 1983 y 1989 (la Unión Cívica Radical) que condujo a un grupo de dirigentes a introducir proyectos en el Congreso, llevando su reclamo desde el ámbito interno partidario hacia la esfera pública (Caminotti 2014). Con el propósito de presionar a líderes y legisladores, tanto en Argentina como en otros países se conformaron coaliciones multipartidarias de mujeres (Goyes Quelal 2013; Piscopo 2010; Marx, Borner y Caminotti 2007; Htun 1993) que pusieron en práctica un amplio repertorio de prácticas políticas (de movilización, de negociación, de incidencia). Fueron, en el amplio sentido del término, verdaderas *policy entrepreneurs*, esto es, agentes con capacidad de iniciar cambios mediante el despliegue de acciones orientadas a conseguir apoyo para nuevas ideas (Mintrom 1997).

A diferencia de Argentina y de otros países, en México las cuotas legales cobraron impulso *a partir* de las cuotas de partidos. En 1991, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) incorporó una cuota para posiciones internas y en 1993, una cuota para cargos internos y candidaturas legislativas. Ese año, por iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una reforma del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE) estableció que los partidos deberían *promover* una mayor participación de las mujeres en la vida política mediante su nominación a los cargos de elección popular (Baldez 2004), estableciendo así una “*proto-cuota*”. Como argumenta Piscopo (2010: 2), “mujeres de la élite –activistas de los partidos y legisladoras– presionaron sin descanso para aumentar la participación política de las mujeres en los partidos y el Congreso”.

Aunque la legislación mexicana de 1993 se asemejaba a una declaración de principios, significó la aparición de la primera medida para garantizar la equidad de género en la legislación electoral del país (Reynoso y D’Angelo 2006). En 1996, el PRI adoptó una recomendación para que no más del 70% de los candidatos del partido fuesen del mismo género y esa medida partidaria se plasmó, a

finales de 1996, en el COFIPE¹⁴. En esa coyuntura post Beijing, las “mujeres activistas de la sociedad civil se convirtieron en aliadas importantes en la lucha por la igualdad de las mujeres, en las que las cuotas de género fueron una de las medidas recomendadas” (Piscopo 2010: 12).

En Costa Rica, la campaña que condujo a la incorporación de cuotas en la legislación electoral se organizó desde una agencia estatal, el actual Instituto Nacional de las Mujeres. En Guatemala, en 1997 una coalición de mujeres y la Oficina Nacional de la Mujer propusieron una cuota máxima de candidaturas a cargos electivos para cualquiera de los sexos, pero una comisión de reforma electoral se opuso a la propuesta argumentando su carácter discriminatorio¹⁵. La intervención del mecanismo para el adelanto de las mujeres (MAM) del Estado también tuvo importancia en Argentina, donde el Consejo Nacional de la Mujer (creado en 1992) desplegó una intensa actividad para garantizar la reglamentación del cupo femenino e impedir que fuese malogrado en la práctica.

En Ecuador, la ley de cuotas del 2000 resultó del trabajo de la Comisión Legislativa de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia, en coordinación con organizaciones de mujeres (Goyes Quelal 2013). En el 2004 se creó la Comisión por los Derechos Políticos de las Mujeres integrada por mujeres en puestos de poder, partidos políticos y organizaciones sociales, con el propósito de “promover la participación política y pública de las mujeres como un fundamento importante para el fortalecimiento democrático y de participación...” (*Ibíd.* 2013: 68). Finalmente, en 2008 “la constitucionalización de la paridad [...] tuvo como principales actrices en la Asamblea Constituyente a mujeres que accedieron como asambleístas, algunas identificadas como feministas, otras provenientes del trabajo en organizaciones de mujeres y otras que adhirieron a la agenda de derechos políticos de las mujeres” (*Ibíd.*, 2013: 66).

En Bolivia, el llamado Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia trabajó estrecha y tenazmente para la inclusión de mujeres en la Asamblea Constituyente y, luego, se articuló con mujeres electas para incorporar la paridad al texto constitucional (Sánchez y Uriona 2014), entre otras reformas que ubicaron al país a la vanguardia en el reconocimiento de derechos de las mujeres en su diversidad. En Uruguay, las agencias del Sistema de Naciones Unidas trabajaron con la Red de Mujeres Políticas y con la Bancada Bicameral Femenina del Parlamento en el proyecto “Más Mujeres, mejor política” (ONUMujeres, UNFPA y PNUD) y elaboraron materiales de sensibilización sobre la ley de cuotas aprobada en 2009 para su aplicación en las elecciones nacionales de 2014 y subnacionales de 2015 por única vez.

En la mayoría de los casos, los partidos reaccionaron de manera ambivalente y estratégica frente al reclamo de justicia y democratización de las mujeres. Sin la aquiescencia de las dirigencias, las

¹⁴ El Partido Acción Nacional (PAN) pudo resistir este “efecto de contagio” hasta 1999, cuando modificó sus Estatutos para cumplir con la legislación (Baldez 2004).

¹⁵ En 1998, se presentó un proyecto de ley de cuotas que no logró la mayoría especial necesaria para su aprobación.

cuotas no hubiesen logrado las mayorías para su aprobación en los Congresos. Sin embargo, los actores partidarios *negociaron* el contenido de las cuotas y en varios casos flexibilizaron su diseño para retener grados de libertad (estableciendo excepciones, incorporando contenido ambiguo y/o evitando mandatos de posición). Como resultado, muchas de las primeras leyes tuvieron evidentes debilidades que saltaron a la luz durante su implementación.

Otras reacciones partidarias consistieron en proponer interpretaciones burocráticas (Borner *et al.* 2009) a la hora de confeccionar sus listas de candidatos, ubicando a las mujeres estrictamente en las cantidades mínimas permitidas o relegándolas a los lugares más difíciles de conseguir, como ha ocurrido en los distritos de mayoría relativa en México (Freidenberg y Caminotti 2014). En estas situaciones, las cuotas *mínimas* funcionaron como techos para el crecimiento de la presencia femenina en los Congresos. En otros casos, las resistencias partidarias se expresaron en incumplimientos de la legislación (especialmente de los mandatos de posición y la alternancia) y, en el extremo, mediante prácticas abiertamente discriminatorias, de acoso y violencia política de género, como un efecto no esperado y no deseado de las medidas de equidad (Cerva 2014)¹⁶.

En este desbalanceado juego de poder entre mujeres y dirigencias de los partidos, las instituciones estatales tuvieron intervenciones clave mediante reglamentaciones del Poder Ejecutivo y decisiones de los organismos electorales que contribuyeron a resguardar el sentido y el alcance de las cuotas de género (como en los casos emblemáticos de Costa Rica y México)¹⁷. En suma, las cuotas evolucionaron, se modificaron y fueron cobrando legitimidad de manera gradual y con distintos ritmos. En la siguiente sección, se ofrece una mirada de conjunto de la naturaleza del proceso de reforma iterada en la región.

V. La naturaleza de las reformas: iteración y ajuste de las reglas

En su mayoría, los países que adoptaron cuotas en la década de 1990 reformaron la legislación (o reglamentación) para precisar mandatos de posición (Argentina, Costa Rica), aumentar el porcentaje previsto (Perú y Ecuador en 2000, República Dominicana en 2002, México en 2008), incorporar medidas complementarias (Brasil en 2009) e introducir la paridad de género (Gráfico 2). Con las excepciones de Uruguay (2009), El Salvador (2013) y Chile (2015), estas leyes no

¹⁶ El caso conocido *Las Juanitas* en México es un ejemplo. En 2009, ocho mujeres electas para la Cámara de Diputados federal por distintos partidos (entre ellos, el PRI y el PRD) pidieron licencia de su cargo para dejar la banca a sus suplentes hombres. Este suceso motivó que un grupo de mujeres interpusiera una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para obligar a los partidos a cumplir con la ley (Freidenberg y Caminotti 2014).

¹⁷ También ha habido casos donde los órganos electorales favorecieron interpretaciones contrarias a las leyes de cuotas. En Ecuador, en varias oportunidades el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de composición partidaria, tomó decisiones que contrariaron el mandato de posición, en línea con las preferencias de las dirigencias de partidos (Goyes Quelal, 2013). En la República Bolivariana de Venezuela, un artículo referido a las cuotas en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (1998) fue derogado porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo consideró inconstitucional (Madriz Sotillo, 2012).

establecen plazos de temporalidad¹⁸. El único caso de derogación ocurrió en Venezuela, donde la cuota de 1997 se declaró inconstitucional y no se llegó a aplicar¹⁹.

En Colombia, la primera ley de cuotas (Ley N° 581) aprobada en 2000 promovía el acceso femenino a los cargos públicos en la administración y la inclusión de un 30% de mujeres en los órganos internos de los partidos políticos. Esta última medida no pasó la revisión de constitucionalidad obligatoria y no entró en vigor. La Corte Constitucional “argumentó que la imposición de dicha cuota en los partidos constituiría un caso de ‘injerencia estatal’ en su funcionamiento interno, contrario a lo definido por el texto constitucional. Lo establecido por esta sentencia frenó por más de una década cualquier posibilidad de crear acciones afirmativas al interior de los partidos políticos” (Puyana 2014: 7). Sin embargo, una reforma política de 2009 obligó a los partidos y a los movimientos políticos a incorporar la equidad de género entre sus principios rectores (Acto legislativo 001), estableciendo una proto-cuota que abrió el camino a la adopción de una nueva ley de cuotas en 2011 (véase Puyana 2014).

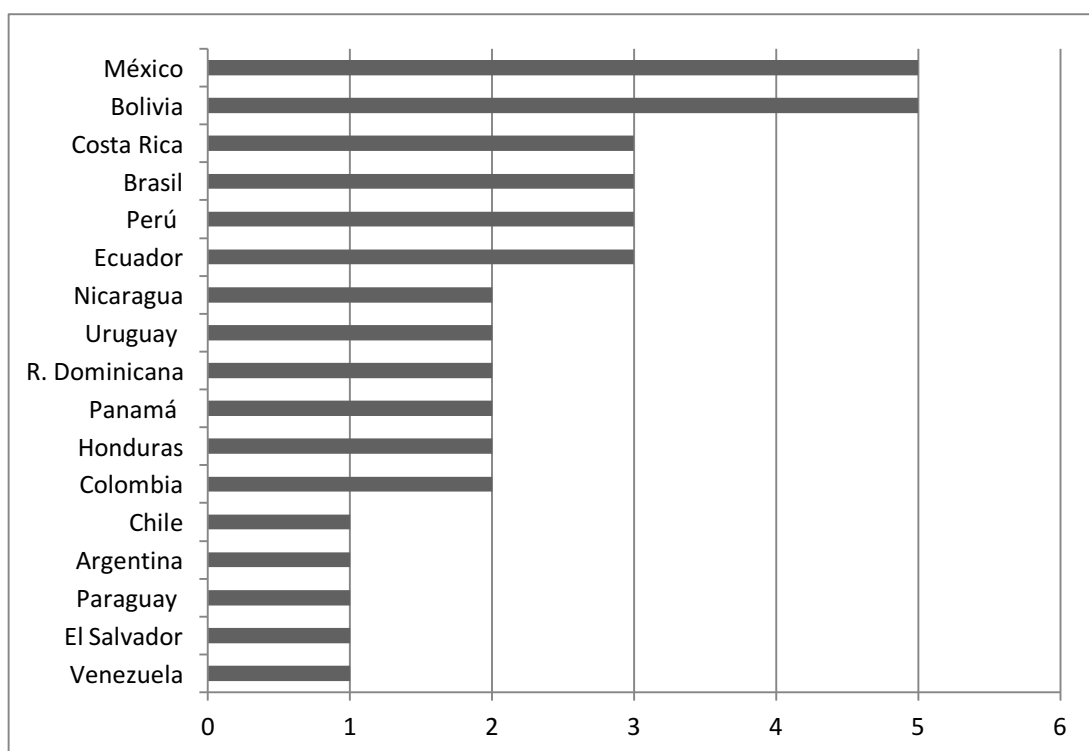
A partir de estos desarrollos, una mirada general de América Latina revela una sucesión de procesos de reforma que expresaron las negociaciones, los aprendizajes y los conflictos entre mujeres, actores político-partidarios e instituciones del Estado. En términos estratégicos, uno de los aspectos más conflictivos fue la defensa de la autonomía partidaria frente a la injerencia estatal en sus procesos y procedimientos internos. En términos más operativos, los mayores focos de tensión fueron los mandatos de posición o de alternancia en las nóminas de candidaturas, que implican desplazar candidatos hombres en favor de mujeres.

¹⁸ En Uruguay, la Ley 18.476 de 2009 estableció una cuota de género para las elecciones nacionales de 2014 y subnacionales de 2015. En El Salvador, la normativa de cuotas contempla una vigencia de cinco elecciones, mientras que en Chile se prevé su vigencia para cuatro procesos electorales (2017, 2021, 2025 y 2029).

¹⁹ La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política estableció una cuota mínima de postulación de mujeres en el Artículo 144: “Los partidos políticos y los grupos de electores, deberán conformar la postulación de sus candidatos por listas a los cuerpos deliberantes nacionales, estatales, municipales y parroquiales, de manera que se incluya un porcentaje de mujeres que representen como mínimo el treinta por ciento (30%) del total de sus candidatos postulados. No se oficializará ninguna lista a partidos políticos o grupos de electores que no cumplan con estas especificaciones. Esta disposición no es aplicable en aquellos casos de elecciones uninominales.” En 2005 y 2008, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó una resolución especial para cada elección exigiendo que los partidos adoptaran criterios paritarios en la confección de las nóminas de candidatos, pero no se cumplieron. En 2009 la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó la Ley de Procesos Electorales pero, pese a la existencia de una propuesta para incorporar la paridad de género en un artículo, éste no fue incluido (Madriz Sotillo 2012).

Gráfico N° 2

Número de leyes de cuota y paridad, por país (1990/2015)*



*Se consideran las proto-cuotas de Costa Rica (Ley de Promoción Social de la Mujer, 1990), Bolivia (Ley de Participación Popular, 1994), México (Reformas al COFIPE de 1993 y 1996), Colombia (Acto legislativo 001, 2009) y Nicaragua (Reglamentación de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, 2010). En Uruguay se contabilizan dos leyes de cuota porque fue preciso dictar una ley interpretativa específica de la primera.

Fuente: elaboración propia basada en legislación de los países.

Algunas de las leyes iniciales tuvieron debilidades de diseño, incorporan excepciones y reglas poco claras, como resultado de las negociaciones alcanzadas. En este sentido, la ley pionera de Argentina (1991) simplemente exige postular un porcentaje mínimo de 30% de mujeres “y en proporciones con posibilidad de resultar electas”, pero no fija un mandato de posición que clarifique cómo hacer operativo ese principio. En el momento de la discusión en el Congreso – donde gran parte de los legisladores tenía precauciones con respecto al proyecto (Caminotti 2014)– esta laguna facilitó la aprobación de la ley y trasladó el conflicto a la fase de confección de las listas para las elecciones de 1993. Para saldar estos aspectos, se necesitaron dos reglamentaciones del Poder Ejecutivo, dictadas en 1993 y 2001, la segunda luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declarara la admisibilidad de un caso presentado por una ciudadana que alegó la violación de los derechos al debido proceso, a los derechos políticos, a la igualdad ante la ley y

a los recursos efectivos establecidos el Pacto de San José de Costa Rica, por parte de la República Argentina en su perjuicio²⁰.

Otros ejemplos similares provienen de Brasil y de México. En Brasil, la ley de cuotas de 1997 estableció un mínimo de 30% y un máximo de 70% para cada sexo en las candidaturas a todos los cargos de elección proporcional. Sin embargo, esta norma se asemejaba a una declaración de compromiso ya que no establecía ninguna clase sanción si los partidos no cumplían la cuota. A su vez, los partidos quedaron habilitados a nominar hasta un 50% más de candidatos que de cargos en juego, lo cual ha sido interpretado como una “cláusula de escape” a la legislación (Htun 2003)²¹. Recién en 2009, una nueva ley de cuotas (Ley 12.034) estableció un 30% efectivo, junto a otras medidas complementarias que exigen a los partidos la reserva de al menos un 10% del tiempo de propaganda partidaria para promover la participación política femenina y un 5% del fondo partidario a programas de promoción y difusión de la participación de las mujeres. Si no se cumple esta disposición, al año siguiente se adiciona un 2,5% del fondo partidario a ese destino²².

En México, de manera similar, la ley electoral de 1996 *recomendaba* a los partidos que no asignaran más del 70% de sus candidaturas legislativas a un sexo pero no *obligaba* a ello e incluso permitiría ubicar a las mujeres en las categorías de suplentes (Baldez 2004). Tras la adopción de esta ley, los porcentajes de mujeres electas para el Congreso federal decrecieron y ello alentó propuestas de reforma legal. La reforma del COFIPE del 2002 incorporó una cuota más precisa²³ y, en 2008, una nueva reforma elevó la cuota de 30% a 40%. En 2011, tras una serie de demandas presentadas por mujeres de la sociedad civil y candidatas (tras el escándalo de *Las Juanitas*), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció que la fórmula completa de las candidaturas (propietarias y suplentes) debía integrarse por mujeres y que el método de selección de candidatos no exceptuaría a los partidos del cumplimiento de la cuota de género²⁴.

²⁰ Para un estudio detallado de ese proceso y de las disputas judiciales en torno de la Ley de Cupo femenino, puede verse Lázzaro (2008).

²¹ Para dar un ejemplo hipotético, si en un distrito electoral correspondía elegir diez cargos de diputado, cada partido podía postular hasta quince (15) candidatos/as. De acuerdo con la ley 9.504, cuatro candidaturas debían ser para mujeres, pero los partidos podían optar por presentar sólo once candidatos varones (en lugar de 15) sin vulnerar la ley (Marx, Borner y Caminotti 2007).

²² La ley no establece cláusulas que definan una penalidad si no se cumple la cuota en las candidaturas pero hay una nueva interpretación de la Corte Electoral en esa dirección (comunicación personal con Clara Araújo).

²³ De acuerdo a esta ley, las listas de representación proporcional (RP) debían incorporar al menos una mujer cada tres candidatos y, en el caso de los distritos uninominales, no más de 70% de candidaturas de un sexo a menos que emplearan métodos democráticos para la selección de candidatos (Baldez 2008). En México, 300 cargos de diputado se eligen por mayoría relativa en distritos uninominales y los restantes 200 en distritos plurinominales.

²⁴ En 2011, Instituto Federal Electoral (IFE) acordó que los partidos deberían presentar al menos 120 y 26 candidaturas para Diputados y Senadores de un mismo sexo sin importar el método democrático para la elección de candidatos de MR de un partido político (CG413/2011). A su vez, el IFE impuso un ultimátum de 48 horas a casi todos los partidos para obligarlos a cumplir la cuota en la elección federal de 2012 (Freidenberg y Caminotti 2014).

Un último ejemplo del ajuste sucesivo de la legislación de cuotas lo brindan dos países que han adoptado la paridad, Ecuador y Costa Rica, y que presentan distintas trayectorias de resolución. En Ecuador, la Ley Elecciones del año 2000 (que incorporó una cuota mínima progresiva con la obligación de incrementarse hasta lograr la igualdad) enfrentó la negativa de los partidos a respetar el mandato de secuencialidad y alternancia, y el organismo electoral (de integración partidaria) no fue imparcial frente a las mujeres que reclamaron por los incumplimientos en casi todas las elecciones del período (Goyes Quelal 2013). El cambio de las reglas de juego sobrevino tras la Asamblea Constituyente de 2008, con la incorporación de la paridad en la Constitución del Estado y en el Código de la Democracia (2009).

En Costa Rica, en cambio, la justicia electoral fue clave para mejorar y ajustar la ley de cuotas aprobada en 1996, cuyo diseño era débil (cuota de 40% sin mandato de posición en las listas ni sanciones expresas). En las elecciones que siguieron a la aprobación de esta ley, los partidos tendieron a posicionar a las mujeres en las candidaturas de suplentes o en posiciones desfavorables de las listas (Torres García 2013). Los mandatos de posición y las sanciones vinieron de la mano del Tribunal Supremo de Elecciones, que fue un “arquitecto” de las cuotas mediante resoluciones que permitieron garantizar el cumplimiento y disciplinar a los partidos políticos²⁵.

La paridad, al vincularse con los criterios de secuencialidad y alternancia, permite superar una de las mayores dificultades que encontraron las cuotas mínimas: la discusión sobre el lugar y orden de las candidatas en las boletas partidarias. Sin embargo, Costa Rica ilustra que la paridad también enfrenta “barreras semejantes [a las cuotas mínimas], en particular las que imponen los sistemas electorales” (Archenti 2011: 10), las culturas políticas y los cálculos estratégicos de los políticos. En las elecciones legislativas de 2014, la primera aplicación de la paridad produjo una disminución del número de diputadas electas y un retroceso del país en el Ranking de Mujeres en el Parlamento. Ello no fue una consecuencia de que los partidos evadieran la norma, sino de un proceso de fragmentación por el cual varias listas eligieron un único cargo y llevaban mujeres a partir del segundo lugar (OEA 2014). Esta situación motivó nuevas tentativas de reforma que dieron curso a propuestas de paridad horizontal, que implicarían extender este principio a la primera posición de las listas, la cual normalmente queda exceptuada en las leyes de cuota.

²⁵ Dos decisiones clave en este sentido fueron: i) la Resolución 1863, que estipuló la ubicación de la cuota de 40% en puestos elegibles e indicó sanciones (no inscripción de las nóminas que no se ajusten a la cuota de género, ni acreditación de las reformas estatutarias y actas partidarias que no cumplan); y ii) Resolución 2837, que estableció el *método o criterio histórico* (el promedio de los resultados electorales obtenidos por la agrupación política) para calcular los puestos con posibilidades reales de ser electos, de manera análoga a la reglamentación del Poder Ejecutivo en Argentina.

VI. Conclusiones: avances y límites de las respuestas centradas en la reforma electoral

En América Latina, las cuotas electorales se expandieron extraordinariamente en dos décadas, al abrigo de una agenda internacional y regional de derechos humanos que visualiza a la desigualdad de género en el ámbito público como un problema que amerita una respuesta de política. Las leyes de cuota no son medidas homogéneas ni completamente asimiladas al interior de los partidos políticos, si bien los procesos observados sugieren una trabajosa pero progresiva institucionalización de estos mecanismos. La incorporación de las cuotas en la legislación electoral fue una solución motivada en la dificultad de establecer reglas que garanticen un trato igual a las mujeres al interior de las organizaciones políticas (o de hacer que se cumplan) y esto implicó una intervención del Estado en el “jardín secreto de la política” (utilizando la metáfora de Gallagher y Marsh 1988).

La adopción y paulatina institucionalización de las cuotas de género no se puede comprender por fuera del contexto que proporcionaron la consolidación de los procesos democráticos, en el plano doméstico de los países, y la emergencia de un conjunto de normas, declaraciones y redes internacionales que establecieron nuevas ideas en torno de la igualdad de género, nuevas obligaciones del Estado como garante de los derechos fundamentales y nuevos estándares de legitimidad democrática. Parafraseando a Choque Aldana (2013), la consagración legal de las cuotas y de la paridad es indisociable del continuo “ensanchamiento de derechos políticos” impulsado por la transnacionalización del discurso de derechos humanos.

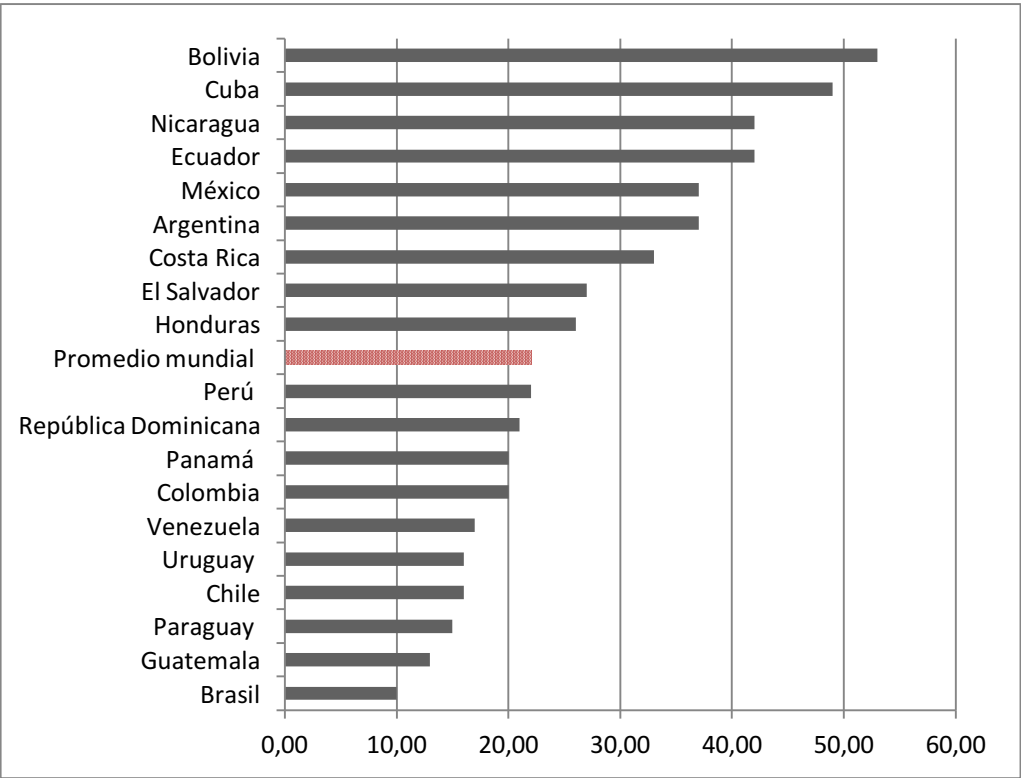
En el período considerado en este trabajo, se amplió considerablemente el promedio regional de participación de las mujeres en el Poder Legislativo y algunos países presentan cifras paritarias o muy cercanas a ellas en sus Congresos (Ver los Gráficos 3 y 4 en el Anexo). Con un 53% de diputadas nacionales, Bolivia tiene la segunda cámara legislativa con mayor porcentaje de mujeres del mundo, un logro significativo. En Nicaragua y Ecuador las mujeres ocupan un 42% de las bancas nacionales y, en Argentina y México, la proporción de diputadas es de 37%. De todas maneras, las cuotas tuvieron efectos diferenciados por país, dependiendo de las características del sistema electoral (listas cerradas *versus* listas abiertas/desbloqueadas, tamaño de los distritos), de las culturas partidarias y de las condiciones más generales del contexto social y cultural.

Las cuotas y la paridad, consideradas en conjunto, “simbolizan un reordenamiento de la esfera pública para incluir a las mujeres, sus perspectivas y sus preocupaciones” (Piscopo 2010: 14). De todas maneras, también tienen limitaciones para remover las diversas barreras que operan en la base de la desigualdad de las mujeres. A partir de investigaciones reciente (Krook y Norris 2014; Verge y De la Fuente 2014), estas limitaciones se pueden ordenar en dos grandes dimensiones: 1) la *naturaleza multidimensional* de los obstáculos que las mujeres enfrentan para participar en la actividad política (la escases de tiempo y de recursos vinculada al patrón de división sexual de

trabajo, el acoso y la violencia de género); y 2) las *dinámicas y reglas informales* (desigual reconocimiento, prácticas sexistas) que provocan o refuerzan la desigualdad al interior de los partidos y organizaciones políticas, muchas veces de manera velada.

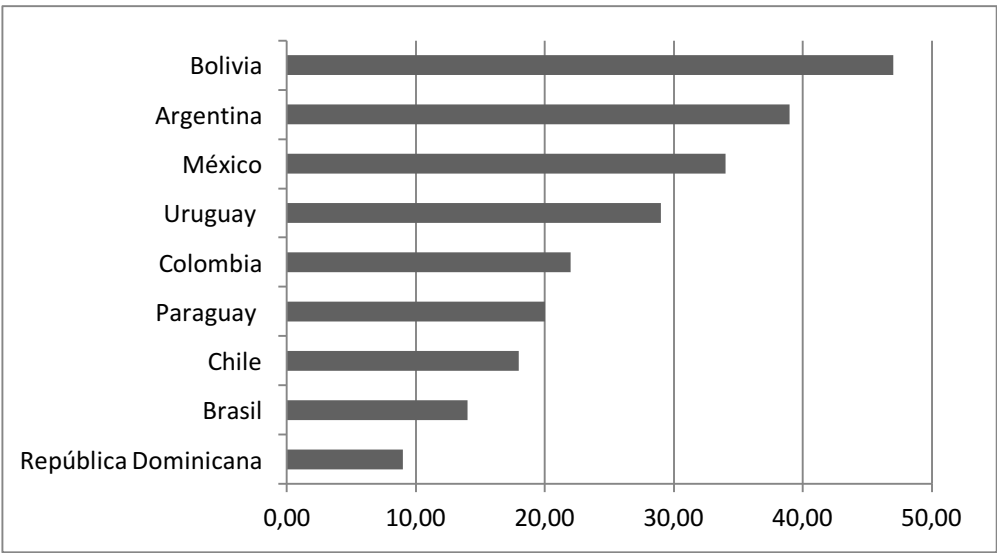
La naturaleza multidimensional de los obstáculos y la vigencia de reglas informales que contrarían la igualdad real están íntimamente conectadas y requieren de una canasta de medidas que exceden el campo de la regulación electoral (aunque dicha regulación puede ser de enorme ayuda). En este sentido, un desafío de la praxis política es acompañar las cuotas y la paridad con medidas explícitamente encaminadas a ampliar la autonomía económica de las mujeres, la corresponsabilidad en el cuidado, el ejercicio y goce de los derechos sexuales y reproductivos, y la posibilidad de vivir una vida libre de violencia, incluidos el acoso y la violencia política de género.

Gráfico N° 3
Mujeres en el Congreso nacional: Cámara baja o única, 2014 (en porcentajes)



Fuente: Elaboración propia basada en datos de Inter-Parliamentary Union (diciembre de 2014).

Gráfico 4. Mujeres en el Senado nacional, 2014 (en porcentajes)



Fuente: Elaboración propia basada en datos de Inter-Parliamentary Union (diciembre de 2014).

VII. Bibliografía

- Araújo, Clara y García, Ana Isabel (2006) "Latin America: the experience and the impact of quotas in Latin America", en Drude Dahlerup. Eds. *Women, Quotas and Politics*, London y New York: Routledge, 83-110.
- Archenti, Nélida (2011) *La paridad política en América Latina y el Caribe. Percepciones y opiniones de los líderes de la región*. CEPAL Serie Mujer y Desarrollo 108, Santiago de Chile.
- Bacchi, Carol (2006) "Arguing for and against quotas: theoretical issues", en Drude Dahlerup (editor). *Women, Quotas and Politics*, New York y London: Routledge, pp.32-50.
- Baldez, Lisa (2008) Cuotas versus Primarias: la nominación de candidatas mujeres en México, en Marcela Ríos Tobar (eds.) *Mujer y política. El impacto de las cuotas de género en América Latina*. Santiago de Chile: FLACSO, Catalonia, pp. 157-177.
- Baldez, Lisa (2004) Elected Bodies: The Gender Quota Law for Legislative Candidates in Mexico. *Legislative Studies Quarterly*, Vol. 24: 2: 231-258.
- Borner, Jutta, Caminotti, Mariana, Marx, Jutta y Rodríguez Gustá, Ana Laura (2009). *Ideas, presencia y jerarquías políticas. Claroscuros de la igualdad de género en el Congreso Nacional de Argentina*. Buenos Aires, Argentina: PNUD/Prometeo Libros.
- Caminotti, Mariana (2014) Ideas, legados y estrategias políticas en la reforma de las reglas de selección de candidatos: la institución del cupo femenino en Argentina. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, Vol. 23 (2): 65-85.
- Caul, Miki (2001) Political Parties and the Adoption of Candidate Gender Quotas: A Cross National Analysis. *The Journal of Politics* Vol. 63 (4): 1214-1229.
- Cerva, Daniela (2014) Participación política y violencia de género en México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, Vol. LIX, núm. 222 (septiembre-diciembre): 1-20.
- Choque Aldana, Marlene (2013) Paridad y alternancia en Bolivia. Avances y desafíos de la participación de las mujeres en la política, en *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica*. Perú: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, pp. 121-175.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2014) *Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en los países de América Latina y el Caribe*. Preparado por Sonia Montañó Virreira. Naciones Unidas: Santiago de Chile.
- Connell, R. W. (2005) Change among the Gatekeepers: Men, Masculinities, and Gender Equality in the Global Arena. *Signs: Journal of Women in Culture & Society*, Vol. 30 (3): 1801-1825.
- Crocker, Adriana (2005) *Gender Quota Laws in Latin America. Explaining Cross-National and Sub-National Diffusion*. PhD. Dissertation, Northern Illinois University.
- Dahlerup, Drude (2006) Introduction, en *Women, Quotas and Politics*, Drude Dahlerup editor. London y New York: Routledge, pp. 3-31.
- Dahlerup, Drude y Freidenvall, Lenita (2005) Quotas as a "Fast Track" to Equal Political Representation for Women: Why Scandinavia is No Longer the Model. *International Feminist Journal of Politics* Vol. 7 (1): 26-48.
- Franceschet, Susan y Krook, Mona Lena (2006) State Feminism and Gender Quotas in the 'North' and the 'South': Comparative Lessons from Western Europe and Latin America. Paper presented at the *Annual Meeting of the International Studies Association*, San Diego, CA, March 22-25.
- Freidenberg, Flavia y Caminotti, Mariana (2014) Federalismo electoral, fortaleza de las cuotas de género y representación política de las mujeres en Argentina y México, Trabajo presentado

en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Chicago, 21-24 de mayo.

- Gallagher, Michael y Michael Marsh. Eds. (1988) *Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics*. Londres: SAGE Publications Ltd.
- Goyes Quelal, Solanda (2013) De las cuotas a la paridad: el caso del Ecuador, en *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica*. Perú: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, pp. 47-115.
- Htun, Mala (2003) Dimensiones de la inclusión y exclusión política en Brasil: Género y raza. *Serie de Informes Técnicos del Departamento de Desarrollo Sostenible*, Banco Interamericano de Desarrollo. Washington DC.
- Htun, Mala (2004) Is Gender like Ethnicity? The Political Representation of Identity Groups. *Perspectives on Politics*, Vol. 2 (3): 439-458.
- Htun, Mala y Jones, Mark P. (2002) Engendering the Right to Participate in Decision-making: Electoral Quotas and Women's Leadership in Latin America, en Nikki Craske y Maxine Molyneux editoras. *Gender and the Politics of Rights and Democracy in Latin America*, Houndsmill, New York: Palgrave, pp. 32-56.
- Htun, Mala y Piscopo, Jennifer (2014) Women in Politics and Policy in Latin America and The Caribbean, *Conflict Prevention And Peace Forum CPPF Working Papers On Women In Politics: 2*.
- Krook, Mona Lena y Norris, Pippa (2014) Beyond Quotas: Strategies to Promote Gender Equality in Elected Office. *Political Studies* Vol. 62 (1): 2-20.
- Krook, Mona Lena (2005) *Politicizing Representation: Campaigns for Candidate Gender Quotas Worldwide*. PhD. Dissertation, Columbia University.
- Krook, Mona Lena (2005b) Quota Laws for Women in Politics: A New Type of State Feminism?, Paper presented at the European Consortium for Political Research, Joint Sessions of Workshops. Granada, April 14-19.
- Krook, Mona Lena (2008) Quota Laws for Women in Politics: Implications for Feminist Practice. *Social Politics* Vol. 15 (3): 345-368.
- Krook, Mona Lena (2014) Electoral Gender Quotas: A Conceptual Analysis, *Comparative Political Studies* 47 (9): 1268-1293 [published online July 19th 2013].
- Krook, Mona Lena, Lovenduski, Joni y Squires, Judith (2009) Gender Quotas and Models of Political Citizenship. *British Journal of Political Science*, Vol. 39: 781-803.
- Lázzaro, Alejandra (2008) El papel de la justicia en la resolución de conflictos de género. El caso de la Argentina, en Nélica Archenti y María Inés Tula (eds.) *Mujeres y política en América Latina. Sistemas electorales y cuotas de género*, Buenos Aires: Heliasta.
- Llanos Cabanillas, Beatriz (2013) A modo de introducción: Caminos recorridos por la paridad en el mundo, en *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica*. Perú: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, pp. 17-43.
- López Novo (1994) El particularismo reconsiderado. Orientación de la acción y contexto institucional. *REIS, Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, Núm. 67: 31-63.
- Madriz Sotillo, Jhannett M. (2012) Visibilización de la mujer en la República Bolivariana de Venezuela. *Revista Derecho Electoral* N° 13, enero-junio [Versión On Line].
- Marx, Jutta, Borner, Jutta y Caminotti, Mariana (2007) *Las legisladoras. Cupos de género y política en Argentina y Brasil*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Matland, Richard y Studlar, Donley (1996) The Contagion of Women Candidates in Member District and Proportional Representation Systems: Canada and Norway. *The Journal of Politics*, Vol. 58 (3): 707-733.

- Meier, Petra (2008) Belgium: a best practice put in perspective, en *Electoral Gender Quota Systems and their Implementation in Europe*, European Parliament, pp. 42-50.
- Organización de los Estados Americanos (2014) *Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Costa Rica*. San José, 3 de febrero de 2014.
- Peña Molina, Blanca (2014) La paridad de género: eje de la reforma político-electoral en México. Manuscrito enviado para ser publicado en *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, con fecha el 18 de junio de 2014.
- Piscopo, Jennifer M. (2010) Gender Quotas and Equity Promotion in Mexico. Paper presented at the 2010 International Congress of the Latin American Studies Association, Toronto, October 6-9.
- PNUD/Rodríguez Gustá, Ana Laura (2011) *¿Quién promueve la igualdad en los Parlamentos? Experiencias de bancadas, comisiones, unidades técnicas y grupos mixtos en América Latina y el Caribe*. PNUD, Panamá.
- Puyana, José Ricardo (2014) Mujeres y política en Colombia: reformas, incidencia y acciones desde la cooperación (2007-2014). Trabajo presentado en el I Foro Internacional "Mujeres, política, democracia. Rompiendo los techos de cristal en América Latina", Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, 23 al 28 de marzo de 2014.
- Reynoso, Diego y Natalia D'Angelo (2006) "Las leyes de cuota y su impacto en la elección de mujeres en México", *Política y Gobierno*, Vol. XIII (2): 279-313.
- Rodríguez Gustá, Ana Laura (2008) Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de intervención, *Temas y Debates*, año 12 (16): 109-129.
- Sánchez, María del Carmen y Uriona, Katia (2014) *De tejidos y entramados desde la diversidad. Sistematización de experiencias colectivas de las mujeres en el Proceso Constituyente, Post Constituyente y Autonómico*. Coordinadora de la Mujer, Primera edición: junio de 2014.
- Sartori, Giovanni (1992) *Elementos de Teoría Política*. Buenos Aires: Alianza editorial.
- Sineau, Mariette (2008) "France: 'parité' under the law", en *Electoral Gender Quota Systems and their Implementation in Europe*, European Parliament, pp. 51-59.
- Torres García, Isabel (2013) Paridad para el fortalecimiento de la democracia incluyente: el caso de Costa Rica, en *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica*. Perú: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
- Verge, Tània y De la Fuente, María (2014) Playing with different cards: Party politics, gender quotas and women's empowerment, *International Political Science Review*, Vol 35 (1): 67-79.
- Yin, Robert K. (1994) *Case Study Research. Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage.